

Fragmentos

El malestar de la ley

La historia muestra que, en términos generales, cuando ha habido perturbadores de las habitualidades jurídicas, objetores del pensamiento bendecido por la autoridad del pasado o detractores de la reducción rastreramente utilitaria de la sed de justicia, raramente han sido juristas sino filósofos, poetas, novelistas, ensayistas, artistas e incluso abogados prácticos, quienes hirieron la prestancia de los doctores en la vanidad de su reclamo científicista. Lutero decía de los juristas que son malos cristianos, rara vez huéspedes del cielo; y Erasmo de Rotterdam que su ciencia consiste en amontonar glosa sobre glosa y opinión sobre opinión, sin producir nada que valga la pena. Los escépticos, como Montaigne, cuando se interrogaba qué bondad es ésta que el paso de un río convierte en delito. O como Blas Pascal, ese gran apostador, cuando comentaba, respecto de la jurisprudencia: verdad de este lado de los Pirineos, error más allá de ellos. Algunos casos aparecen oscurecidos –¿o iluminados?– por la desesperación, como se lo demuestra en la obra de Kafka. Célebre el caso de Julius Hermann von Kirchmann, quien no era estrictamente un jurista, un cultor del derecho de profesores, sino un fiscal en ejercicio que, en una conferencia pronunciada en 1847, impugnó el carácter científico de la actividad de los juristas, volcada a un objeto mutable, sobre el cual no pueden establecerse leyes como las descubiertas en el reino de la naturaleza: ‘Dos palabras rectificadoras del legislador bastan para convertir bibliotecas enteras en basura’, decía. Pero nada de esto hizo demasiada mella en esa

“Es muy probable que la crisis de la inmediata primera posguerra haya sido de las más graves padecidas en la historia del saber de los juristas...”

poco menos que incommovible prestancia de los sabios de la ley que, contaron, además, con el auxilio de oportunas renovaciones epistemológicas; ni les impidió, llegado el momento, asumirse como escribas de los más crudos intereses”.

“Graves acontecimientos, sin embargo, conmovieron en diversos sentidos esa prestancia durante el siglo XX. Es que el imperio de la ley, que Occidente construyó en términos de dogmática de la verdad, crujió en sus cimientos mismos. La guerra de 1914-1918 y su inmediata posguerra los confrontó con una crisis profunda del Estado de derecho y del parlamentarismo. Las intensas sacudidas políticas en medios sociales enrarecidos, con sucesivas oleadas revolucionarias y contrarrevolucionarias, condujeron a una renovada vigencia de la distinción entre legalidad y legitimidad. No seguía siendo posible aceptar con facilidad el diagnóstico, reafirmado por Max Weber poco después del cese de las hostilidades, en sus célebres conferencias editadas en castellano con el título *El político y el científico*, que ve en la ‘dominación racional-legal’ la forma típicamente moderna de legitimación del poder.

Es muy probable que la crisis de la inmediata primera posguerra haya sido de las más graves padecidas en la historia del saber de los juristas, tanto como en la historia de la adscripción occidental a la legalidad. Era paralela a la del idealismo filosófico, impulsada tanto desde pensamientos impregnados de teología como desde las diversas corrientes del empirismo neopositivista; desde ambos frentes se hacían temblar los grandes edificios conceptuales y padecía la confianza en la autonomía e integridad del sujeto. Operaba en un medio intelectual que ya había sido afectado por el agotamiento de la interpretación exegética, que se había tratado de superar por la vía de renovar los ‘métodos interpretativos’. Esa preocupación hermenéutica, centrada en cuestiones metodológicas, tema egregio de la doctrina jurídica, configuraba en sí misma un derrotero técnico que facilitaba eludir otras posibilidades de discusión en torno a los temas relacionados con la ley y el derecho. Parecía no advertir las más profundas implicaciones de lo que me gustaría denominar ‘malestar de la legalidad’, al que contribuía, entre otros factores, el escaso éxito de la búsqueda de espacios donde pudiera tener acogida jurídica la cada vez más devaluada confianza en las políticas liberales para habérselas con la llamada cuestión social”.

ARNOLDO SIPERMAN

La ley romana y el mundo moderno, juristas, científicos y una historia de la verdad, Editorial Biblos, Deseo de Ley, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, págs. 205 y 206;

Peaje odioso

La reciente Ley 1653 del 2013, sancionada el pasado 15 de julio, ha regulado de manera más amplia que la derogada Ley 1394 del 2010, el arancel judicial, que impone a la mayoría de los usuarios de la justicia, la carga de pagar “una contribución para el proceso de inversión de la administración de justicia” (art. 2º) “antes de presentar la demanda” (art. 6º) en aquellos procesos en los que se formulen “pretensiones dinerarias” (art. 4º). El monto del arancel es del 1,5 % de las pretensiones dinerarias de la demanda, sin exceder del equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales (art. 8º).

Del inicial sistema de una justicia gratuita para todo el mundo, lenta pero perceptiblemente, hemos virado a un modelo de justicia onerosa e inalcanzable para muchos sectores de la población. La anterior Ley 1394 del 2010 –derogada por la nueva normativa– si bien preveía un arancel judicial, lo circunscribió solamente a los procesos ejecutivos y dispuso que el pago del mismo debería hacerse al final. Ahora, la Ley 1653 del 2013 ha previsto que ese arancel por regla general, tenga que ser cancelado en todos “los procesos judiciales con pretensiones dinerarias” (art. 4º), como requisito para acceder a la justicia.

El propósito de la ley es, en principio, plausible. En efecto, el arancel judicial “constituirá un ingreso público a favor del sector jurisdiccional de la Rama Judicial” (art. 3º, inc. 2º) para sufragar sus gastos de inversión. Sin duda, todos los recursos económicos que reciba la justicia son bienvenidos, más ahora que, por ejemplo, buena parte de los juzgados de descongestión quedaron suspendidos el pasado mes de julio, por insuficiencia presupuestal. Pero lo que no



RAMIRO BEJARANO GUZMÁN
Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia

“... no parece sensato haber impuesto esta carga para promover cualquier proceso que contenga una pretensión dineraria, porque ello afectará gravemente los derechos de muchos ciudadanos”.

parece sensato es haber impuesto esta carga para promover cualquier proceso que contenga una pretensión dineraria, porque ello afectará gravemente los derechos de muchos ciudadanos.

Cierto es que la obligación de pagar el arancel quedó excluida cuando se trata de iniciar procesos arbitrales, penales, laborales, contencioso laborales, de familia, de menores, procesos liquidatorios, de insolvencia, de jurisdicción voluntaria, acciones de control constitucional, populares, de grupo, de cumplimiento y las demás acciones constitucionales. Tampoco deberá pagarse el arancel cuando el demandante obtenga el reconocimiento de amparo de pobreza, o cuando se trate de persona natural que en el año inmediatamente anterior a la presentación de la demanda no hubiere estado obligada a declarar renta, pues en estos eventos estará

a cargo del demandado si fuere vencido, quien deberá sufragarlo al final del proceso.

Los defensores a ultranza de la ley sostienen que ahora los bancos y entidades financieras, grandes consumidores, en especial de la jurisdicción ordinaria, tendrán que pagar para tener derecho a presentar sus demandas dinerarias. Nadie puede desconocer que es justo que estas entidades, con poder económico, cuyas solicitudes judiciales tienen atiborrados los despachos judiciales, contribuyan con los gastos de inversión de la justicia. Pero la misma conclusión no puede adoptarse respecto de la generalidad de los usuarios.

Si el objetivo principal de la Ley 1653 del 2013 era que las entidades del sector financiero contribuyeran económicamente con los gastos de inversión de la justicia, no tiene sentido haberlas metido en el mismo saco con el resto de los ciudadanos. No hubo a quien, en el Gobierno o en el Congreso, se le ocurriera que la ley habría tenido mejor aceptación, si el arancel judicial se hubiese impuesto solamente a las entidades financieras. No faltará quien afirme que esa reglamentación habría devenido inconstitucional por afectar el principio de igualdad entre los usuarios de la administración de justicia. No hay tal, la desigualdad que lesiona la Carta Política es aquella que se presenta entre iguales, y es claro que entre los bancos y entidades de crédito y los ciudadanos del común hay abismales diferencias.

Ya que en las altas esferas del poder nadie cayó en la cuenta de que con esta ley se cerraban las puertas de la justicia a la inmensa mayoría de ciudadanos incapaces de pagar el arancel para acceder a la justicia, ojalá la Corte Constitucional esta vez vele por los derechos ciudadanos y sepulte esta ley que, en vez unir a los colombianos, los dividirá todavía más, entre los que pueden o no acceder a la justicia.

Parágrafo de Pepón

Bajonazo



Pepón